

La consulta plantea, en primer lugar, durante cuánto tiempo han de conservarse las cláusulas a través de las cuales os concesionarios de automóviles informan a los afectados acerca del tratamiento de los datos de carácter personal que serán incorporados a sus ficheros, así como de los que serán comunicados a la entidad fabricante del vehículo al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, para el adecuado cumplimiento por la misma de las obligaciones que la Ley viene a imponerle. Según se indica, las empresas fabricantes consideran necesaria la conservación de las cláusulas informativas durante un período de diez años, mientras que los concesionarios suelen proceder a su destrucción al cabo de un período de seis o siete años.

En todo caso, no se adjuntan a la consulta las cláusulas a las que se ha hecho referencia, por lo que no es posible conocer con exactitud las finalidades respecto de las cuales el interesado ha sido informado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal.

Con independencia de que a la vista de lo señalado en la consulta el tratamiento y cesión de los datos a los que la misma se refiere no precisan el consentimiento del interesado, el artículo 18.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone que “el deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras persista el tratamiento de los datos del afectado”.

En consecuencia la acreditación de que el afectado ha sido debidamente informado tanto del tratamiento de los datos por parte del concesionario como de su cesión a la entidad fabricante del vehículo deberá cumplirse en tanto persista el tratamiento, tanto por ésta como por aquél.

El artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, reiterado por el artículo 9.6 de su Reglamento de desarrollo, dispone que “los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”.

Al propio tiempo, el artículo 16.5 de la Ley Orgánica establece que “los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado”.

En el supuesto al que se viene haciendo referencia, tanto el tratamiento de los datos por parte del concesionario como el que posteriormente lleva a cabo la empresa fabricante se fundan en la existencia de una relación jurídica entre los responsables y el adquirente del vehículo, cuyo adecuado mantenimiento, desarrollo o cumplimiento exigen el tratamiento de los datos.

Por este motivo, los datos deberían conservarse en tanto ello siga siendo necesario para el adecuado desarrollo de la relación que vincula al usuario con el concesionario y con la fábrica, procediéndose a su cancelación una vez se extinga dicha relación. Una vez cancelados los datos será posible, conforme al artículo 18.1 del Reglamento, proceder a la destrucción de la información acreditativa del cumplimiento del deber de información legalmente impuesto.

Teniendo esta circunstancia en cuenta, no es posible establecer un plazo fijo que determine el momento en que haya de procederse a la cancelación y cese la obligación de conservar la acreditación del deber de información. Para ello sería preciso atender a la actividad desarrollada por el concesionario, de modo que si, por ejemplo, una vez satisfecho el importe del vehículo, se desarrolla por aquél un servicio post-venta o de reparaciones, los datos podrán conservarse mientras el afectado siga manteniendo en su poder el vehículo. Igualmente, la regla temporal que acaba de indicarse podría ser aplicable al fabricante.

Pero ello no determina que el deber de conservación se mantenga durante el plazo de diez años, al que se refiere el fabricante ni durante el mencionado por el concesionario, siendo mayor o menor a uno o ambos de los plazos mencionados atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto.

Por ello, no es posible dar una respuesta a la cuestión planteada que fije un plazo determinado de conservación, debiendo estarse a cada caso concreto. En todo caso, la obligación de conservación de la acreditación del cumplimiento del deber de informar persistirá en tanto deba procederse al tratamiento de los datos.

En segundo lugar, se plantea si resulta posible la cesión de los datos referidos a las reparaciones efectuadas al perjudicado en un accidente de tráfico a la entidad que deberá responder de las mismas; es decir, aquella con la que el causante haya celebrado el correspondiente seguro obligatorio de vehículos de motor.

La comunicación a la compañía aseguradora de los datos del perjudicado supone una cesión de datos de carácter personal, que deberá resultar conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica, cuyo apartado 2 a) exime de la necesidad de contar con el consentimiento del afectado en los supuestos en los que una norma con rango de Ley habilite la

cesión. Igualmente, y como ya se dijo, el artículo 11.2 c) considera que el consentimiento del afectado no es necesario cuando la cesión “responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”.

El artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 octubre, dispone que “el asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes. El perjudicado, o sus herederos, tendrán acción directa para exigirlo. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artículo 1”.

Por tanto, como consecuencia de la producción del siniestro se genera una relación jurídica entre la compañía aseguradora del causante del daño y el perjudicado que otorga a éste una acción directa contra aquélla para exigir el pago de la indemnización derivada de los daños causados por el siniestro. Por este motivo, la comunicación de los datos referidos al perjudicado y a los daños producidos en su vehículo resulta amparada por la Ley Orgánica 15/1999.